



Resumen de Prensa

lunes, 21 de febrero de 2022

VALLADOLID



FUENTE: Ministerio de Fomento / elaboración propia.

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID
Nuevo jarro de agua fría para la eternamente aplazada Autovía del Duero, la anhelada A-11 que acumula tres décadas de retraso. Nada más celebrarse las elecciones autonómicas en Castilla y León, desconvocada ya toda campaña electoral, las grúas de los tramos en construcción han desaparecido o se han quedado reducidas a la mínima expresión. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el tramo en obras en el término municipal de la localidad vallisoletana de Tudela de Duero, en las proximidades de Traspinedo. Para ver máquinas hay que adentrarse en los barros, al norte, y solo quedan unas pocas que pueden contarse con los dedos de las manos, en tareas de movimiento de tierras.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) reconoció hace pocos días, en respuesta a este periódico, que el tramo en construcción Tudela de Duero-Olivares de Duero, adjudicado en septiembre de 2019, se encuentra a tan solo el 18% de ejecución, cuando la primera fecha de conclusión de obras que se manejaba venía el próximo mes de diciembre. A todas luces se acumulará un nuevo retraso, si es que no se produce una parada total de la intervención como se empieza a especular entre algunos contratistas.

Del tramo anexo que se adjudicó meses después, en junio de 2020, el Olivares de Duero - Quintanilla de Arriba, mejor no hablar. El plazo de ejecución -en teoría-, se prolongará tres años, pero un año y siete meses después de la adjudicación no se ven avances señalados.

La desaparición de las máquinas que en plena campaña electoral lucían activas y lozanas en las proximidades de Traspinedo se ha producido, según el Ministerio, por causa de «un movimiento planificado dentro de la normalidad y ejecución de la obra en ese tramo». Sin embargo, la misma fuente reconoce, como se ha dicho, un grado de ejecución actual «del 18% aproximadamente».

Los trabajos más significativos que se han ejecutado hasta la fecha,

según el Mitma, son «el movimiento de tierras, estructuras, drenajes y reposición de servicios afectados».

De manera más concreta, el Ministerio detalla que se ha efectuado movimiento de tierras, en concreto la ejecución de terraplén y desmontes. También se han acometido estructuras, entre ellas «casi todos los pasos inferiores y pasos superiores», así como drenajes, pues «se tiene ejecutado la mayor parte del drenaje transversal». Por otra parte, «se ha iniciado la reposición de las líneas eléctricas y de telefonía afectas, así como conducciones de abastecimiento».

Ahí termina la lista de trabajos acometidos, pero no hay ni un metro de autovía que esté a la vista de ponerse en servicio en diciembre y apenas hay un puñado de operarios para sacar adelante la infraestructura. La Delegación del Gobierno, que tanto ha presumido de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha licitado y adjudicado por valor de muchos cientos de millones en la Comunidad de Castilla y León, tendrá que explicar ahora por qué esas adjudicaciones no se ejecutan en tiempo y forma.

Si no vuelven inmediatamente las grúas y los operarios a la Autovía del Duero, la A-11 se habrá convertido de nuevo en el pitoreo de todos los gobiernos centrales que pasan por La Moncloa. No hay que olvidar que el tramo Olivares-Tudela se adjudicó 17 años después de la ejecución del segundo tramo de la A-11 sobre suelo de la provincia de Valladolid (el Tordesillas-Villaeser), y 18 tras la apertura en 2002 del primero de los tramos (el Valladolid-Tudela de Duero).

Se trata de un segmento de 20,2 kilómetros contratado por 79,1 millones de euros, con fecha de finalización prevista para diciembre de 2022, que el Mitma contrató con la Unión Temporal de Empresas formada por Constructora San José, S. A. y Avintia Proyectos y Construcciones S. L. La adjudicación supuso una baja del 25% respecto al precio inicial de licitación, establecido en 105 millones de euros.

El último de los tramos adjudicado sobre territorio vallisoletano, el Olivares-Quintanilla, de 14,5 kilómetros de longitud, se encargó a la Unión Temporal de Empresas formada

por Vías y Construcciones S. A., Ortiz Construcciones y Proyectos S. A. y Construcciones y Obras Valbuena S. A. U. por 97.985.800 euros, IVA incluido, lo que supuso una rebaja del 27,4% respecto al precio inicial de licitación, que alcanzaba los 134.968.848 euros.

Una vez construidos estos dos tramos contratados, aún quedará por convertir en autovía, en lo que a suelo vallisoletano se refiere, el segmento comprendido entre Quintanilla de Arriba y el límite provincial, al este, en el término de Castrillo de Duero. Son alrededor de 18 kilómetros.

El Mitma comunicó el 3 de diciembre de 2019 el inicio de las obras del Olivares-Tudela, que tuvo lugar en la zona próxima a la ubicación de la futura área de servicio, entre los puntos kilométricos 16 y 17 del proyecto, con los primeros trabajos de desbroce, estaquillado y la tramitación de los trabajos arqueológicos.

El trazado se separa por el norte de la N-122, y discurre por los términos municipales de Tudela de Duero, Villabáñez, Villaverde y Olivares de Duero, para continuar luego hacia el este hasta Quintanilla de

Nueva burla en la construcción de una infraestructura necesaria que dura ya más que la obra de El Escorial. La A-11, trocada en un teatro de títeres para la campaña electoral, acumula más de tres décadas de retraso. A diez meses del primer plazo estimado del tramo Olivares-Tudela de Duero, el Ministerio reconoce que solo se ha ejecutado el 18%.

Atrezo de máquinas en la A-11 solo para las elecciones

Arriba, donde se unirá de nuevo al trazado de la antigua Nacional.

El trayecto Tudela-Olivares prevé la construcción de dos enlaces, uno para dar acceso a las localidades de Sardón de Duero y Quintanilla de Onésimo por la N-122, así como a Tudela de Duero por su vertiente oeste a través de la VP-3302 y la propia N-122, y el segundo enlazará con la carretera VP-3301.

El segundo de los tramos, Olivares-Quintanilla, discurre por los términos de Olivares de Duero, San Román, Valbuena de Duero y Quintanilla de Arriba. Las obras prevén dotar la vía de calzadas de siete metros de anchura, arcenes interiores de un metro y exteriores de 2,5. Además, en el trazado se ejecutarán tres enlaces. El primero se ubica en el cruce de la autovía con la VA-104, en Olivares, mientras que el segundo se realizará con la VP-3001, al noroeste de la localidad de Valbuena de Duero. El tercero estará cerca de la localidad de Quintanilla, en la N-122.

El documento técnico incluye en este proyecto un ecoducto de 190 metros de longitud y 80 de anchura para minimizar el 'efecto barrera' sobre la fauna y la afección sobre la geomorfología y el paisaje. También un viaducto que salvará el valle Bajada del Páramo y un puente en el cruce con el Duero.

El Gobierno de Pedro Sánchez demostró con los últimos Presupuestos Generales del Estado que la A-11 sigue sin estar en las prioridades de Madrid, ya que las cuentas inyectan al recorrido Quintanilla-Tudela 80 millones de euros de los 103 destinados al vial, pero alargan su final hasta 2024, dos años más de lo previsto inicialmente, y no ponen fecha de finalización al trayecto Olivares-Quintanilla.

Y es que de poco sirve consignar una cantidad en los Presupuestos si no se tiene la intención de ejecutarlos. Nada se prevé en ellos, salvo una exigua cantidad testimonial de 100.000 euros, para los siete tramos aún sin licitar de la eterna A-11, una obra convertida en faroánica que ya habría terminado cualquier faraón.



J. M. LOSTAU / IVAN TOME / PHOTOGENIC

LA SOLEDAD DEL OPERARIO ANTE LA INMENSIDAD. Arriba, un único operario contempla la inmensidad de la obra desde un paso elevado a medio construir. Las mayoría de las máquinas y los maquinistas abandonaron la zona hace pocos días, tras la jornada electoral. En el centro, una pequeña pala excavadora junto a una furgoneta. Abajo, movimiento de tierras, fase de la que no ha pasado la mayor parte del proyecto.

La pandemia dispara el empleo del sector público hasta las 202.000 personas, el récord desde 2011

El Estado abona salarios y prestaciones a 928.000 personas en Castilla y León, que tiene 782.600 ocupados en el sector privado

ANGEL BLANCO

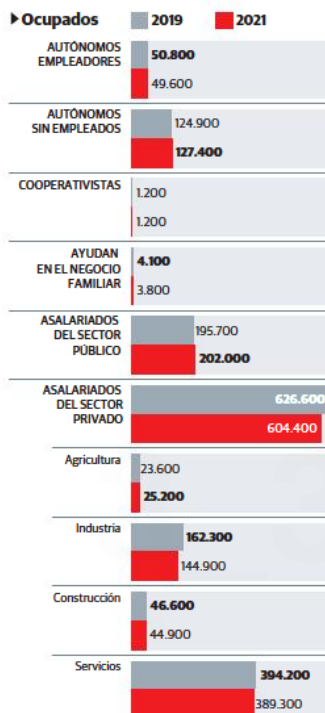
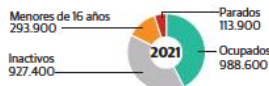
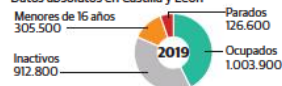


VALLADOLID. El paisaje después de la pandemia, o al menos el que queda transcurridos casi dos años del estallido de la covid-19, es mucho mejor que el que dejó la crisis financiero-inmobiliaria de 2008. Pero solo hace falta echar un vistazo al panorama de la población desde un punto de vista económico y laboral para comprobar que la sociedad (ya, o todavía) no es la que era. Castilla y León tiene menos desempleados y casi tantos ocupados como antes, si bien este balance no es una suma de 2+2. Muchos parados no han virado hacia el mercado laboral sino hacia la inactividad. Y en la composición del empleo, el del sector privado ha perdido ocupados, todo lo contrario de lo que ha sucedido en el sector público.

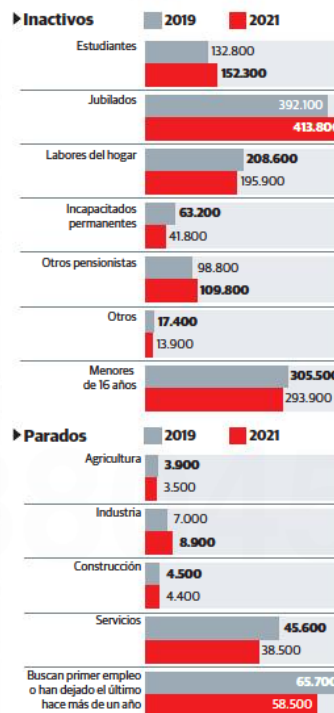
En el cuarto trimestre de 2021, el INE contabiliza en Castilla y León 202.000 asalariados de las diferentes Administraciones Públicas, desde funcionarios a personal laboral o eventual, así como contratados para funciones puntuales, para labores financiadas por los planes de empleo locales, etc. El Boletín del Personal al Servicio de las Administraciones registra, con datos de julio de 2021, 168.129 personas, una cifra con poca variación en los últimos años. De ellos, 33.945 pertenecen a la Administración del Estado; 97.963 a la Junta de Casti-

Radiografía económica de la población de Castilla y León

Datos absolutos en Castilla y León



Fuente: INE



DATOS AL CIERRE DE 2021

- ▶ Pensiones contributivas: 617.138
- ▶ Asalariados del sector público: 202.000
- ▶ Prestaciones de desempleo: 72.624
- ▶ Pensiones no contributivas: 20.982
- ▶ Ingreso Mínimo Vital: 15.625

lla y León, incluidas las universidades, y 36.221, a los ayuntamientos y diputaciones.

Por el contrario, la EPA ofrece un retrato más dinámico de las nóminas que abona el Estado en cada momento. En el cuarto trimestre de 2008 estimaba un colectivo de 183.700 asalariados públicos, el mínimo de la serie histórica. Tres años después, la cifra había escalado a 210.000, el máximo nunca registrado.

A partir de entonces se produce un repliegue que se detiene en 2018 (siempre con datos del último trimestre de cada año), con 188.600 personas, que pasan a ser 195.700 en 2019. De modo que en los dos últimos años, que prácticamente coinciden con la pandemia, los trabajadores empleados por el sector público se han incrementado en más de 6.000 personas.

Parados y pensionistas

En ese lapso temporal, los asalariados del sector privado han pasado de los 626.600 del año 2019, la cifra más elevada desde 2008, a los 604.400 con que despídido la comunidad el año pasado, es decir, 22.000 menos.

La pandemia de la covid, sus



Opositores para plazas de peón de limpieza en Valladolid. R. JIMÉNEZ

repercusiones y limitaciones, sus exigencias y sus consecuencias, han desangrado laboralmente a empresas y autónomos hasta un punto del que aún no se han recuperado, mientras que han elevado la nómina de asalariados en ámbitos como el sociosanitario o la educación.

Con dinero público

Esta circunstancia, unida a otras a las que tampoco es ajena la pandemia, han desequilibrado el perfil de la población en el sentido de incrementar el número de nóminas que abona el Estado. La EPA recoge un total de 786.700 ocupados en el sector privado, frente a los 202.000 del sector público. Si a estos últimos se les suman los pensionistas con una prestación contributiva y los beneficiarios de las no contributivas, los desempleados que perciben prestación o subsidio y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, el número de personas supera las 928.000, es decir, casi 146.000 más que la suma de asalariados y autónomos.

Faltaría por incluir en esta lis-

Los asalariados del sector privado han pasado de los 626.600 de 2019, la cifra más elevada desde 2008, a los 604.400 del año pasado

La comunidad ha perdido en dos años más de 1.000 autónomos con empleados y 17.400 ocupados por cuenta ajena de la industria

Los 2,32 millones de habitantes que refleja la EPA en Castilla y León son 25.100 menos con respecto al cierre de 2019

ta a los trabajadores en ERTE (el año empezó con 40.000 y terminó con 7.000), para obtener una visión de hasta qué punto a puesto a prueba el virus de Wuhan la solidez de las finanzas públicas. Un repaso a la población cas-

tellana y leonesa desde la óptica de la actividad arroja el siguiente balance preliminar: hay más asalariados públicos, más autónomos sin empleados (no empleadores), más ocupados en el sector agrario y menos parados. También hay más pensionistas y más estudiantes mayores de 16 años. Todos los demás colectivos evolucionan a la baja.

Del último trimestre 'normal', el cuarto de 2019 al mismo periodo de 2021, la comunidad ha perdido más de 15.000 ocupados, entre los que hay más de 1.000 trabajadores por cuenta propia con empleados; 17.400 asalariados del sector industrial; 1.700 de la construcción y cerca de 5.000 de los servicios.

La cifra de inactivos ha escalado hasta las 927.400 personas, nada menos que 14.600 más que dos años atrás. En este grupo, quienes han optado por seguir estudiando, quizás a la espera de que escampe, han pasado de 132.800 a 152.300; los jubilados son ahora 413.800, lo que supone 21.700 personas más; y el resto de pensionistas, de 98.800 a 109.800.

Han disminuido los castellanos y leoneses que se dedican a las labores del hogar (12.700 menos, hasta 195.900), así como las personas con incapacidad permanente (41.800, que son 21.400 menos).

La baja natalidad y la emigración han hecho menguar el colectivo de menores de 16 años hasta los 293.900, es decir 11.600 menos, y en definitiva la población total de Castilla y León ha caído a 2.323.800 personas, lo que significa que se han perdido 25.100 habitantes con respecto al cierre de 2019.

El drama de la pérdida de población que sufre la comunidad se erige como uno de los peores, si no el peor, de toda España. En estos dos años, el país ha aumentado sus habitantes en 55.400. Han retrocedido los censos del País Vasco (17.100 personas), Aragón (15.200), Asturias (12.600), Galicia (9.200) y Extremadura (8.600).

Castilla y León es, pues, la que más población ha perdido en número absoluto. En tasa (1,07%), solo la superan Asturias y Aragón (1,25% y 1,16%, respectivamente).

Lunes 21.02.22
EL NORTE DE CASTILLA

ECONOMÍA | 27

Escrivá pone en marcha su fondo público de pensiones con reticencias de los empresarios

La patronal considera insuficientes los incentivos planteados en la norma que el Consejo de Ministros aprobará mañana

CLARA ALBA

MADRID. El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de mañana el proyecto de ley para la creación de los nuevos fondos de pensiones de promoción pública con los que se pretende incentivar el ahorro privado para la jubilación.

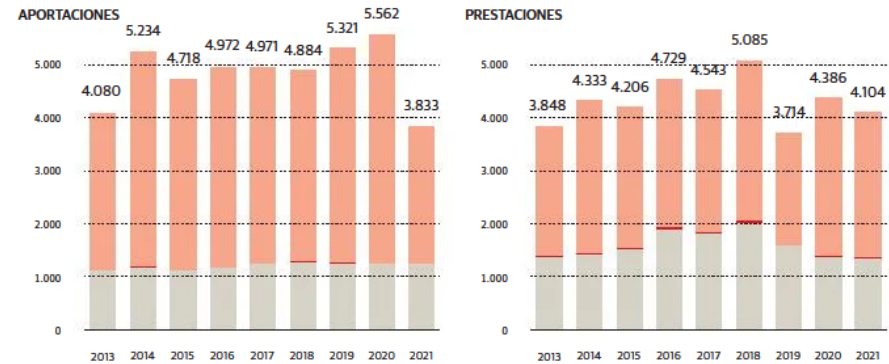
El texto llegará así al Congreso sin el respaldo de la patronal, los sindicatos y también sin el beneplácito total de la banca, que en los últimos días han presionado para introducir –sin éxito– modificaciones a la última propuesta que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, remitió a las partes. «Las principales discrepancias se ciñen a los incentivos planteados para que las empresas participen en el proceso, pero también observamos ciertos problemas de gobernanza», advierten fuentes de la CEOE.

Lo cierto es que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo notable frente a las exigencias de la patronal en el inicio. «Hemos incluido prácticamente todo lo que nos han pedido», defienden desde el Ministerio. El propio Escrivá reconocía el pasado viernes que «nunca hemos aspirado a una ratificación con los agentes sociales», dejando claro que «se han recibido muchas apreciaciones para mejorar la norma y tengo la sensación de que hay bastante acuerdo».

En la última propuesta, a la que ha tenido acceso este diario, el equipo de Escrivá plantea una serie de incentivos que, resumiendo, se traducirían en una rebaja de menos de 80 euros por trabajador en la base de cotizaciones sociales de las empresas. Era una de las reclamaciones de la CEOE. Pero la referencia resulta ahora

Las aportaciones a planes de pensiones, en mínimos

Datos en millones de euros ■ Sistema de empleo ■ Sistema asociado ■ Sistema individual



Fuente: Inverco.

GRÁFICO R.C.

insuficiente. Y en el mismo sentido se manifiestan desde el sector financiero. «No es un incentivo real. Debemos recuperar lo que teníamos en 2006 y 2013, con bonificaciones en el impuesto de Sociedades y en los límites de desgravación», indica Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, patronal de las gestoras de inversión colectiva. Por aquel entonces, las empresas podían acceder, por ejemplo, a una reducción del 10% en Sociedades por determinadas aportaciones.

Pilares del sistema

Tanto gestoras como empresas quieren dejar claro que apoyan la iniciativa para mejorar fiscalmente estos vehículos de ahorro, pero también advierten que la decisión no se debería haber tomado a costa de hacer menos atractivos los planes del sistema individual. El Gobierno rebajó el pasado año de 8.000 a 2.000 euros el límite de las aportaciones máximas que po-

drían desgravarse en el IRPF. Este 2022 el tope es de 1.500 euros. Una situación que –según explica José Antonio Iglesias, presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones– ha provocado que «las aportaciones brutas al sistema individual se redujeran un 40%». Ese dinero, además, «no se está transfiriendo a la previsión social empresarial», donde el límite de desgravación se ha elevado a 8.500 euros si empleador y empleado llegan al máximo de aportación de 4.350 euros.

El borrador establece, además, otra novedad en este punto –también reclamada por los empresarios– para permitir que el trabajador pueda aportar más si la empresa no llega al máximo, a través de una serie de índices establecidos. Por ejemplo, hasta 2,5 veces la aportación de la empresa si esta no supera los 500 euros. «El borrador ha mejorado respecto a la propuesta inicial, pero estamos lejos de conseguir lo que

teníamos», insisten desde la patronal. «Estamos deseando que esto funcione, pero el mayor impulso a los estímulos tendría que darse ahora, al inicio del proceso», añaden.

Presencia pública

Los empresarios también muestran su recelo con la gobernanza planteada para estos vehículos. Critican el elevado peso que mantiene la Administración, a pesar de que el Gobierno ha bajado

de 17 a 13 miembros la comisión de seguimiento que velará por su buen funcionamiento. Según el texto, «cuatro de ellos serán propuestos por las organizaciones empresariales», pero otros cinco serán designados por el Ministerio de Seguridad Social (frente a los nueve planteados al inicio).

La norma también ha eliminado de su redacción el reglamento por el que el Ejecutivo se reservaba el derecho de establecer ciertos criterios de inversión, algo que inquietaba especialmente al sector financiero. «La declaración comprensiva de los principios de la política de inversión (...) será elaborada por la Comisión de Control Especial con la participación de las entidades gestoras», indica ahora el documento.

Pese a los muchos cambios realizados, todo apunta a que sin el apoyo de los agentes sociales, Escrivá tendrá que emplearse a fondo para lograr el visto bueno del Congreso.

LA CIFRA

40%

es lo que cayeron las aportaciones de los ahorradores españoles en planes de pensiones del sistema individual con los nuevos límites a aquellas fijados en 2021.

lunes, 21 de febrero de 2022



domingo, 20 de febrero de 2022



Varios turistas pasean por las calles de Valladolid con sus maletas. **CARLOS ESPESO**

El sector turístico se encomienda a la Semana Santa

Miran el calendario para intentar dejar atrás la incertidumbre que les persigue desde hace casi dos años. Tienen fe. Ponen sus esperanzas en la llegada de la Semana Santa vallisoletana. Esperan que sus plegarias sean escuchadas. Empresarios, hoteleros y hosteleros de la capital ansían que la Semana de Pasión resucite un sector, el del turismo, que lleva crucificado desde el estallido de la pandemia. El sentimiento general es de pesimismo pues el sector se está recuperando de forma muy lenta y coinciden en que «2022 ha empezado muy flojo».

Hay una lista de pequeños factores que se han ido sumando para crear 'la tormenta perfecta' a la hora de no sacar la maleta del trastero para visitar Valladolid. El intenso frío, una sexta ola que se resiste a desaparecer, la empinada cuesta de enero y el encarecimiento general de precios, carburantes y facturas han sido determinantes para que lo poco que ha transcurrido de este 2022 se haya caracterizado por un comienzo de la recuperación turística ralentizado.

«Enero y febrero son de por sí los peores meses del año en cuestión de ocupación hotelera, en los que no ha habido prácticamente volumen de reservas, estaríamos hablando de un 30%», explica Francisco Posada, presidente de la Asociación de Hoteles de Valladolid. Esta entidad concentra al 95% de los alojamientos de la ciudad y desde ella señalan que la recuperación de Pingüinos en el calendario de eventos no ha sido un factor determinante para ellos.

Recuperación. Empresarios del ámbito hotelero y hostelero observan un inicio de año «flojo», pero depositan su confianza en que durante los días de Pasión alcancen cifras similares a 2019

SOFÍA FERNÁNDEZ



«No ha sido el habitual, por eso a nivel de ocupación ha estado en 70% cuando lo normal es llegar al 100%», explica Posada, quien confía en «alcanzar cifras pre pandemia en Semana Santa». Espera volver a colgar el cartel de lleno «sobre todo, de miércoles a viernes y esperamos lle-

gar al 90% durante ese fin de semana», puntualiza. Comparten incertidumbre y confiesan además que la espera hasta las fechas religiosas se les va a hacer eterna a las personas que viven del turismo rural. «Hemos empezado el año fatal. Ahora mismo la ocupación no llega al 10%

y gracias a la gente que trabaja por temporadas y prefiere hospedarse en casas rurales. Normalmente diciembre es un mes de cierre que te ayuda a sobrellevar enero y febrero, pero este año con unas previsiones del 90% de ocupación la realidad ha sido otra y ha caído hasta el 50%», lamenta Luis Chico, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Valladolid.

Señala que, «lejos de lo que pueda parecer» los propietarios de los alojamientos rurales «lo están pasando muy mal». Respecto al futuro del sector afirman que si quieren ser competitivos tendrán que reducir los beneficios, «porque venir ahora a nuestra provincia cuesta más que hospedarse en otras y eso supone un verdadero problema. Por eso, tenemos esperanza en que en Semana Santa alcancemos el lleno absoluto». En su opinión, «ni de lejos estamos en el camino de la recuperación».

Negocios muy endeudados

Indiscutiblemente ligada al turismo, la hostelería nota «un consumo general bajo por la débil situación económica y la incertidumbre pandémica», ese es el balance que hacen los empresarios hosteleros que «ponen su esperanza en 2022» como el año de la recuperación. «De momento no hemos empezado con buen pie. Los negocios están sobreendeudados y no ayuda el encarecimiento de las materias primas, la subida de la cuota de autónomos, el incremento del salario mínimo o la devolución de los créditos. Estamos ante una situación muy complicada», explica Alberto Torrecilla, de la

Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid.

Algo más optimistas se muestran en cambio desde el Ayuntamiento, donde esperan que «la tendencia siga siendo positiva, que las cifras mejoren y que la Semana Santa suponga el despegue definitivo para mejorar las cifras de 2019», señala la concejal de Turismo, Ana Redondo.

Desde la Oficina Municipal de Turismo de Recoletos comparten también que el cambio de tendencia llegará con la Semana Santa. Durante enero han pasado por estas dependencias 3.320 personas -440 menos que en 2021- pero a un abismo de las casi 7.000 que recibieron en enero de 2020.

«Aún falta camino para alcanzar las cifras de normalidad», argumenta el técnico de Turismo, Julio Martínez, pues los datos dejan entrever que la cicatriz de la pandemia no ha curado todavía. Muestra de ello es la cantidad de visitas guiadas que se han realizado este mes de enero en Valladolid: 818 (309 en el mismo mes de 2021) y muy lejos aún de las 1.688 personas que disfrutaron de los rincones de la capital. Por cierto, Ríos de Luz y Valladolid Histórico son las preferidas por los turistas. «La actividad se revitalizará a partir de marzo y seguirá escalando, pero son todo conjeturas», aseguran desde el punto de información.

De momento, se encomiendan a la Semana Santa como salvación de un año que ha empezado tímido y descafeinado. Hasta entonces, coinciden los profesionales involucrados, «habrá que seguir aguantando como sea».

Una ciudad limpia, paseable, segura y con un casco histórico muy concentrado

La percepción general de los turistas cuando visitan Valladolid es la de una ciudad «limpia, paseable y segura», donde encuentran una variada oferta cultural que les permite conocer a fondo museos, edificios históricos, civiles y zonas con encanto.

Entre lo más visitado por los visitantes está el Campo Grande, la Catedral, la Plaza Mayor y el Museo Nacional de Escultura. «Los turistas nos ven como una ciudad que ofrece mucho y supera con creces sus expectativas, donde todo pilla cerca y se les hace muy cómoda la experiencia de conocer la ciudad», explican desde la Oficina de Turismo.

NÚMERO DE USUARIOS POR SERVICIO

Fuente: Ayuntamiento

	Enero 2020	Enero 2021	Enero 2022
Centro de Recursos Turísticos Presencial	6.957	3.760	3.320
Punto de Información San Benito* (No Inaugurado)		1.029	1.080
Oficinas de Información Turística Temporales	0	0	0
Visitas guiadas	1.688	309	818
Consultas web	85.731	16.986	34.385
Visitas torre de la catedral	523	121	353
Valladolid CARD	1.504	19	79
Bus turístico	159	6	216

Valladolid lidera los contratos a menores de 25 en Castilla y León con más de 42.500

● Las contrataciones a jóvenes suben un 32% en la Comunidad en 2021 hasta rozar las 170.000, una de cada cinco registradas ● Solo el 3,6% son indefinidas y tres de cada cuatro en el sector servicios

SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID
 Valladolid lideró el número de contratos a menores de 25 años en 2021 con más de 42.500, en una Comunidad que incrementó un 31,8% este tipo de documentos respecto al año anterior. Supone un crecimiento destacado pero 2,6 puntos por debajo de la media nacional, situada en el 34,4%. El porcentaje de menores de 25 años sobre el total de nuevos contratos en la región es del 20,04%, que centésimas por debajo del conjunto del país, que registra el 20,15. Cuando se atiende a los sectores, los datos reflejan que tres de cada cuatro empleos de jóvenes son del sector servicios.

Se firmaron 169.399 contratos a menores de 25 años en Castilla y León en el pasado ejercicio, de los que solo el 3,61% fueron indefinidos (6.123). Entre la aplastante mayoría de los temporales, destacó la modalidad de temporal por circunstancias de la producción, que agrupó el 58,59% de los contratos (99.252), seguido del de temporal por obra o servicio, con el 29,08% (49.253).

Según un estudio de Randstad, empresa líder de recursos humanos en España, con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), el de los menores de 25 años es un segmento que supone el 7,2% de la población activa en España, y en Castilla y León el volumen de contratación registrado supone el 4,4% del total del país.

A nivel provincial, Segovia fue la que registró el mayor incremento en contratación a menores de 25 años (el 39,4%), seguida por Salamanca (37,3%), Zamora (36,1%) y León (35,9%). Con tasas más moderadas se encuentran Valladolid (34%), Burgos (32,3%), Soria (29,4%), Ávila (27,9%) y Palencia (9,7%). En lo que se refiere a volúmenes, los mayores se registraron en Valladolid (42.517), Burgos (26.185),

León (20.508), Salamanca (19.222) y Segovia (19.194). Siguen en la tabla Palencia (14.956), Ávila (9.523), Zamora (9.371) y Soria (7.900).

En cuanto al conjunto nacional, Randstad destaca que los menores de 25 años firmaron 3.885.891 contratos durante el 2021, un 34,4% más que el año anterior, cuando se registraron 2.892.325, lo que supone una diferencia de 993.566 firmas.

Este segmento de edad es el que experimentó un mayor incremento en la contratación durante el pasado año, ya que, a distancia, se encuentra el de mayores de 45 años, con un crecimiento del 19,5%, y de los trabajadores situados entre 25 a 45, con un 18,4%. Las mujeres menores de 25 años son las que vieron crecer en mayor medida su contratación en España, ya que aumentaron las firmas en un 40,4% con respecto a 2020, con un total de 1,7 millones de contratos. Por su parte, los hombres firmaron 2,1 millones, un 29,8% más.

El estudio ha encontrado considerables diferencias según la comunidad autónoma donde el joven lleve a cabo su actividad. Baleares, con un notable aumento del 70,1%, Cantabria, con el 48,2%, y la Comunidad de Madrid, con el 43,4%, lideran los incrementos de la contratación a profesionales menores de 25 años con respecto al año 2020.

Con aumentos más moderados, pero aún por encima de la media nacional (34,4%), se encuentran País Vasco (41%), Asturias (40,4%), Comunidad Valenciana (37,2%), Comunidad Autónoma de Cataluña (36,1%), Canarias y Aragón (35,6%). Ya por debajo de la media del país se sitúan Castilla y León (31,8%) y otras siete autonomías.

► **ÁVILA.** Por provincias, la contratación a jóvenes en Ávila creció un



Jóvenes operarios en una fábrica de Valladolid. ICAAL

27,86%, desde los 7.448 de 2020 a los 9.523 del pasado año. La mayor parte fue temporal por circunstancias de la producción, un 60,56% (5.767), seguida de los contratos temporales por obra o servicio, un 27,26% (2.596). Pese a ser la tercera provincia con mayor porcentaje de indefinidos, solo se firmó un 4,43% de ellos (422).

► **BURGOS.** Es la que más contratos temporales con menores de 25 años registra por circunstancias de la producción, un 63,19% de los firmados (16.546). La provincia incrementó en un 32,25% el número de contratos a jóvenes en 2021, con 26.185 (6.386 más que en 2020). Es la segunda con más contratos en números absolutos, pero solo el 3,18% fueron indefinidos.

► **LEÓN.** Es la tercera provincia en número de contratos en esta franja de edad en términos absolutos, con 20.508, una subida del 35,88% respecto a 2020 (5.415 más). Más de la mitad, un 52,53%, fueron temporales

por circunstancias de la producción (10.773), a los que siguieron los de obra o servicio, un 33,45% (6.859). El 3,96% fueron indefinidos (813).

► **PALENCIA.** Con 14.956 contratos a menores de 25 años, la provincia sube su número un 9,69% respecto al año anterior (1.321 más). Es el territorio que más temporales por obra o servicio registra, con el 38,41% del total (5.744). La mayoría de los contratos se firmaron por circunstancias de la producción, un 53,34% (7.977). En el otro lado de la moneda está el ratio más baja de contratos indefinidos, solo el 1,50% del total (224).

► **SALAMANCA.** Es la segunda provincia en la que más sube la contratación de jóvenes, un 37,33% hasta un total de 19.222 (5.225 más que en 2020). Por otro lado, es la que más porcentaje de indefinidos registra, un 4,83% del total (929). La mayor parte de los contratos, no obstante, es, como en el resto de las provincias, de temporales por circunstancias de la producción, un 55,7%

(10.707), seguido de temporales por obra o servicio, un 28,81% (5.538).

► **SEGOVIA.** Es la provincia donde más crecen los contratos a jóvenes en términos porcentuales, un 39,35% hasta sumar 19.194 (5.420 más que en 2020). También ocupa el número uno en contratos temporales por circunstancias de la producción, un 70,47% de los firmados en 2021 (13.526). El número de indefinidos alcanzó el 2,91% con 558.

► **SORIA.** Es la tercera provincia en porcentaje de contratos temporales por circunstancias de la producción, un 64,46% de todos los firmados a jóvenes en 2021 (5.107). La provincia incrementó un 29,36% el número de contratos a menores de 25 años en 2021, con 7.923 (1.798 más que en 2020). Solo el 2,69% fueron indefinidos (213).

► **VALLADOLID.** Encabeza la tabla autonómica en números absolutos, ya que firmó 42.517 contratos a menores de 25 años en 2021, un 34% más que el año anterior (10.789 más). Es la segunda provincia que más indefinidos rubrica, un 4,48% del total (1.903), mientras la mayor parte son, como en el resto de los territorios, temporales por circunstancias de la producción, con un 55,22% (23.480). También ocupa el segundo lugar en tipología contractual el temporal por obra o servicio, con un 32,6% del total (13.860).

► **ZAMORA.** Es la tercera provincia que más crece en contratación a jóvenes en términos relativos, un 36,06% hasta los 9.371 (2.483 más que en 2020). La mayoría de esos contratos fueron temporales por circunstancias de la producción, el 57,29% (5.369); un 31,5% fueron por obra o servicio (2.952) y solo un 2,43% fueron indefinidos (228).

Domingo 20.02.22
EL NORTE DE CASTILLA

VALLADOLID | 19

El ICO avaló 3.641,9 millones de euros a 31.590 empresas de Castilla y León en 2021

El 90% de los negocios con operaciones formalizadas están gestionados por autónomos y micropymes

EL NORTE

VALLADOLID. La línea de avales del ICO para facilitar liquidez a las empresas frente al impacto de la covid llegó a 31.590 actividades de la comunidad a finales de 2021, con un importe total avalado por 3.641,9 millones de euros. El número de operaciones ascendió a 51.693, hasta el 31 de diciembre del pasado año, y facilitaron una financiación global de 4.700,8 millones de euros para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante.

El Gobierno aprobó esta Línea de Avales 'Liquidez' de hasta 100.000 millones en marzo de 2020, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la

crisis sanitaria. A fecha 31 de diciembre de 2021, con este programa se habían avalado un total de 1.020.022 operaciones correspondientes a 619.118 empresas en España.

El importe total avalado ascendía a 92.582,4 millones de euros. Esto permitió que las empresas recibieran 121.929,2 millones de euros. Así, las empresas de Castilla y León asumieron el 3,9% del importe de los avales solicitados por las autonomías, las octavas por peso en la distribución, lejos de comunidades como Madrid, 20%; Cataluña, 18,6%; Andalucía, 12,5%; o Valencia, 10,1%.

Fuentes del ICO explicaron a Ical que el 90% de las empresas con operaciones formalizadas están directamente gestionadas por autónomos y micropymes. Asimismo, constataron que esta tipología de empresas, de menos de 10 empleados, solicitó el 74% del total de las operaciones. El 75% de las operaciones avaladas se dirigió a garantizar nuevos préstamos, que, en su mayor parte, 73%, son a largo plazo, de más de cuatro años.

Domingo 20.02.22
EL NORTE DE CASTILLA

El campo teme ya pérdidas multimillonarias por la sequía

Con el segundo peor comienzo de año hidrológico de este siglo y un aseguramiento reducido, el sector clama medidas al Gobierno

J. A. BRAVO

MADRID. «La sequía puede ser la puntilla para los agricultores; estamos cada vez más asfixiados con los costes de los 'inputs' y los problemas en la comercialización de nuestros productos». Lo advierte Andrés del Campo, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes (Fenacore), aunque lo comparten todas las asociaciones agrarias. Pienso, semillas, abonos, plásticos y agua para el riego se han encarecido entre un 30% y un 70% los últimos meses –el gasóleo más de un 85%–, y las diferencias de precio entre origen y destino de los alimentos son aún mayúsculas en muchos casos: un 1.021% las naranjas, un 965% los limones y un 754% los ajos, por ejemplo.

La falta de agua en forma de precipitaciones –del 1 de octubre (inicio del año hidrológico) al 8 de febrero fueron un 38% menos que sus valores normales, según la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores– ha llegado en el peor momento para un sector agropecuario muy castigado. «La pandemia ha hecho estragos –lamenta Pedro Barato, presidente de Asaja–, porque cuando tocaba recuperarse se nos han disparado todos los costes» y encima, criti-

ca, la Ley de la Cadena Alimentaria «sigue sin cumplirse» para garantizar que, «al menos, no incurramos en pérdidas».

Pero esta sequía las traerá y de varios cientos de millones de euros –en 2017, con la peor del último lustro, superaron los 1.000 millones–, pues éste es el segundo peor comienzo del año hidrológico en lo que va de siglo. Las asociaciones coinciden en que hasta que no termine la campaña invernal de cultivos «es difícil conocer los datos con cierta exactitud», apunta Miguel Padilla, secretario general de COAG. No obstante, anticipa que «en las zonas de cereal de secano afectadas se habla ya de pérdidas de entre 300 y 500 euros por hectárea».

En su último análisis detallado, COAG estima que el 50% del campo español se encuentra ya en situación de alerta por sequía, aunque, oficialmente, el Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que hoy solo puede hablarse de «sequía prolongada» en la cuenca del Guadalquivir. Aun así, dicha organización agraria señala que «si no llueve de forma significativa» antes de mediados de marzo, «los cultivos de secano podrían ver dañados sus rendimientos entre un 60% y un 80%».

La lista de afectados se va alargando. Por regiones, las zonas más críticas están en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde corre serio riesgo de perderse gran parte de las producciones de cereales de invierno, colzas, plantas leguminosas y proteaginosas. Asimismo, hay

Seguros contratados en el campo español

El porcentaje por provincia representa la superficie asegurada –con el riesgo de sequía cubierto– sobre el total de cultivos herbáceos



Provincia	Superficie total herbáceos**	Superficie asegurada (ha)*	% superficie asegurada
Soria	257.001	233.470	90,8
Álava	43.505	34.038	78,2
Palencia	347.971	268.584	77,2
Burgos	451.908	343.375	76,0
Valladolid	363.565	259.396	71,4
Guadalajara	203.817	130.735	64,1
Barcelona	62.292	39.668	63,7
Lleida	160.634	98.679	61,4
Salamanca	154.969	90.313	58,3
Zamora	182.315	103.380	56,7
León	113.420	63.844	56,3
Navarra	175.457	92.850	52,9
Segovia	198.476	104.647	52,7
Cuenca	437.985	227.047	51,8
La Rioja	48.215	22.471	46,6
Sevilla	296.799	120.106	40,5
Córdoba	140.863	56.877	40,4
Ávila	111.558	43.224	38,8
Cádiz	146.453	54.980	37,5
Teruel	186.587	59.565	31,9
Murcia	45.197	13.126	29,0
Madrid	90.379	25.277	28,0
Granada	70.758	17.366	24,5
Girona	32.625	7.899	24,2
Málaga	42.506	9.849	23,2
Zaragoza	346.411	78.584	22,7
Huesca	266.055	58.795	22,1
Albacete	250.064	55.043	22,0
Jaén	20.618	3.694	17,9
Badajoz	199.930	34.317	17,2
Toledo	271.080	36.787	13,6
Baleares	42.295	3.790	9,0
Ciudad Real	276.508	19.871	7,2
Huelva	39.704	2.064	5,2
Resto ***	94.579	28.886	30,5
Total	6.172.499	2.842.596	46,1

(*) Superficie asegurada en la línea 309 con el riesgo de sequía cubierto
(**) Datos MAPA Avances de superficies y producciones de cultivos de trigo+cebada+avena+centeno+triticale+grasol+soja
(***) Suma provincias con menos de 20 ha de superficie

Fuente: Asaja

GRÁFICO B.C.

Desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) que preside Andrés del Campo, por el contrario, ponen el foco en la «falta de inversión» en

obras de regulación para « paliar los efectos negativos de las sequías». Según sus datos, solo se han ejecutado dos de cada diez euros previstos en estas infraes-

problemas serios en comarcas de Murcia, Lleida y Girona, mientras en Aragón y La Rioja también preocupan mucho las heladas.

Entre los cultivos que más problemas presentan ya por falta de lluvia destacan los herbáceos, al estar en pleno desarrollo y necesitar mayor humedad. Casi lo mismo pasa con los leñosos de secano como olivar, viñedo y árboles de frutos secos (sobre todo, almendros y pistacheros), los pastos para ganadería en régimen extensivo (vacas, ovejas y cabras), los forrajes y rastrojos (alimento en verano). Y el sector, ante la falta de alternativas –las charcas merman y los caudales de los pozos se reducen–, ha de recurrir a unos piensos cada vez más caros.

Campañas de regadío

La apicultura sufre la merma de floraciones –las anomalías de temperaturas inciden– que reduce las colonias de abejas, mientras algunas siembras –como el girasol– se retrasan. Además, preocupa el inicio de la campaña de regadío, pues se temen restricciones de riego por el bajo nivel de pantanos y embalses, como advierte Ignacio Molina, experto en seguros de Cooperativas Agroalimentarias. A 15 de febrero, la reserva hidráulica nacional era solo del 44,3% de su capacidad, un 28,6% menos que la media de la última década, con especial afección en la mitad sur del país.

Los problemas se agravan con un nivel de aseguramiento reducido –solo el 46% de media en los cultivos herbáceos extensivos y aún menos en otros– por unas primas más caras (las subvenciones han bajado), coberturas menores y mayores penalizaciones. Las asociaciones reclaman al Gobierno medidas fiscales (incluidas exenciones de cuotas sociales) y financieras (créditos y moratorias), entre otras. Luis Javier Merino, de la ejecutiva de Unión de Uniones, solicita que se usen los fondos europeos para situaciones de crisis. España lo pedirá este lunes en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, así como disponer de recursos del desarrollo rural como ayuda inmediata.

estructuras en los planes hidrológicos anteriores. Y ello en un país que hace un aprovechamiento en régimen natural muy reducido de estos recursos: solo el 9% frente a más del 40% en la mayoría de los Estados de la UE.

La nueva planificación hidrológica –que ultima el Gobierno– se aprobará a priori en primavera y en Fenacore se quejan de que sus alegaciones no se hayan considerado, ni tampoco las de otros expertos del regadío pese a que este sector aglutina al 70% de los usuarios del agua. Critican que la intención del Ejecutivo de fijar caudales ecológicos en los ríos «anulará la función de regulación de los embalses»: 85 ya proyectados antes se han eliminado.

Los regantes, preocupados por la nueva planificación hidrológica

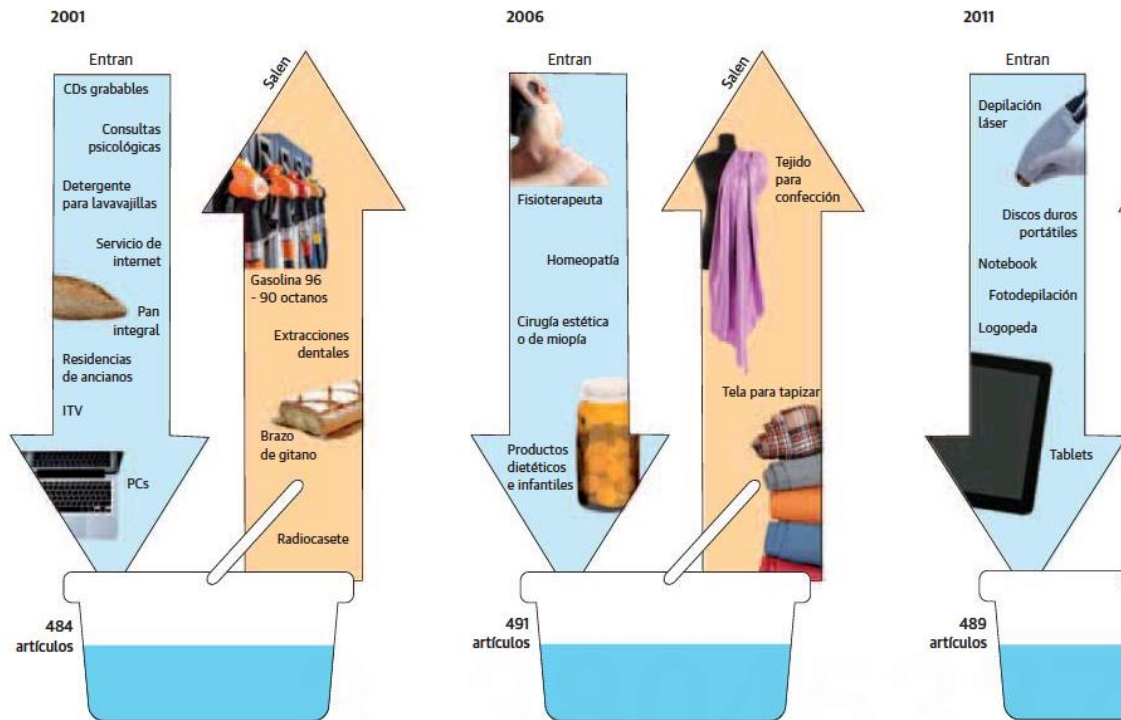
J. A. B.

MADRID. La desertificación es ya «uno de los mayores problemas ambientales». En el caso de España, cuenta con un 74% de zonas secas y más de nueve millones de hectáreas catalogadas como de «riesgo alto o muy alto». Lo han avisado los regantes, que en este punto coinciden con los ecologistas de Greenpeace, quienes añaden que se trata del territorio «más árido» de Europa y que el aumento de temperaturas por el cambio

climático hará que la disponibilidad de agua sea cada vez menor. Por ello, tachan de «insensata» la actual política hídrica nacional.

Tampoco están de acuerdo con ella los agricultores, pero acusan a algunos grupos ecologistas de mantener «posiciones radicales». Estas organizaciones hablan de regadíos «sobredimensionados», robo de agua, pozos ilegales –estiman que hay más de un millón repartidos por todo el país–, trasvases «innecesarios» y «sobreeplotación de recursos».

La evolución de la cesta de la compra en los últimos 20 años



Fuente: INE

De telas para tapizar a suscripciones digitales para cuadrar la inflación

La cesta de la compra que rastrea el INE para calcular el IPC ha pasado de 484 productos a 955 por primera vez este año

FERNANDO MORALES

MADRID. Si en 2001 los españoles consumían, entre otros artículos, radiocassetes, tejidos para confección o tela para tapizar, ya en 2016 predominaron en los hogares los servicios en línea de vídeo y música y en 2021, las suscripciones a periódicos 'on-line'. La

continua evolución de la sociedad y los amplios -y rápidos- cambios tecnológicos que han irrumpido en estas últimas dos décadas han hecho variar, de manera significativa, los productos que predominan en los hogares.

Así lo constata la cesta de la compra con la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora el Índice de Precios de Consumo (IPC), que registró en diciembre el máximo de los últimos 30 años, al escalar hasta el 6,5% (en enero se moderó al 6,1%). Y lo ha hecho no solo por el encarecimiento de la energía, sino también por el alza de los carburantes y lubricantes y buena parte de la cesta

de la compra, que se va impregnando de esta espiral inflacionista. La selección de los productos que componen ese carro 'modelo' se realiza en función del gasto que se hace de cada uno de ellos, para que sean representativos del consumo de los hogares. Así, el INE incorporó en 2011 la fotodepilación y en 2016 los juegos de azar, «algo absolutamente atípico», en opinión del director del Global MBA del Instituto de Estudios Bursátiles, Aurelio García, pero que se añadió por la importancia que tenían en el consumo las apuestas.

La cesta de la compra se actualiza cada cinco años para poder analizar de manera «certera» el

gasto de los españoles. Este análisis comenzó en 1936, pero fue en enero de 2002 cuando entró en vigor el sistema de bases actual, sustentado, a la hora de analizar los productos, en la Encuesta de Presupuestos Familiares y que divide en 12 grupos los productos y sus precios, analizados por el INE.

En esa actualización de la base, aun así, no solo se incorporan o eliminan artículos, sino que también cambian las características de la muestra, ampliando los municipios en los que se analizan los productos y el número de precios recogidos. De esta forma, mientras que en el año 2002 se estudiaron 484 productos, este número ha ido aumentando, pasando de los 489 de 2011 a los 955 de la base de 2021.

Periodo lógico

El sistema utilizado por Estadística está avalado por Eurostat -la oficina de la UE-, y aunque podría revisarse cada menos tiempo, García considera que cambiarlo cada cinco años «es un periodo lógico» para poder analizar si los cambios en los hábitos de los hogares es una tendencia que se mantiene

en el tiempo. «En 2020 se dejó de viajar, ¿esto quiere decir que al siguiente año no debemos tomar en cuenta los costes de alojamiento y transporte?», se pregunta el economista jefe para España en BBVA Research, Miguel Cardoso, para defender la actualización cada cinco años. Lo que sí varía año tras año, y periodo tras periodo, es el peso de cada uno de los 12 grupos en los que se dividen los productos para analizar el IPC.

Mientras que en 2002 el 11% del presupuesto de las familias se destinaba a vivienda, en enero de 2022 aumentó hasta el 14,2%. Otro ejemplo de cómo ha variado el gasto de los españoles se encuentra en el grupo «medicina». Si en 2002 el 2,8% del presupuesto de las familias se destinaba a esta categoría, en 2022 ha aumentado hasta el 4,4%, coincidiendo, entre otras

En las revisiones de los productos se excluyen otros tan consumidos como el mercado liberalizado de la electricidad

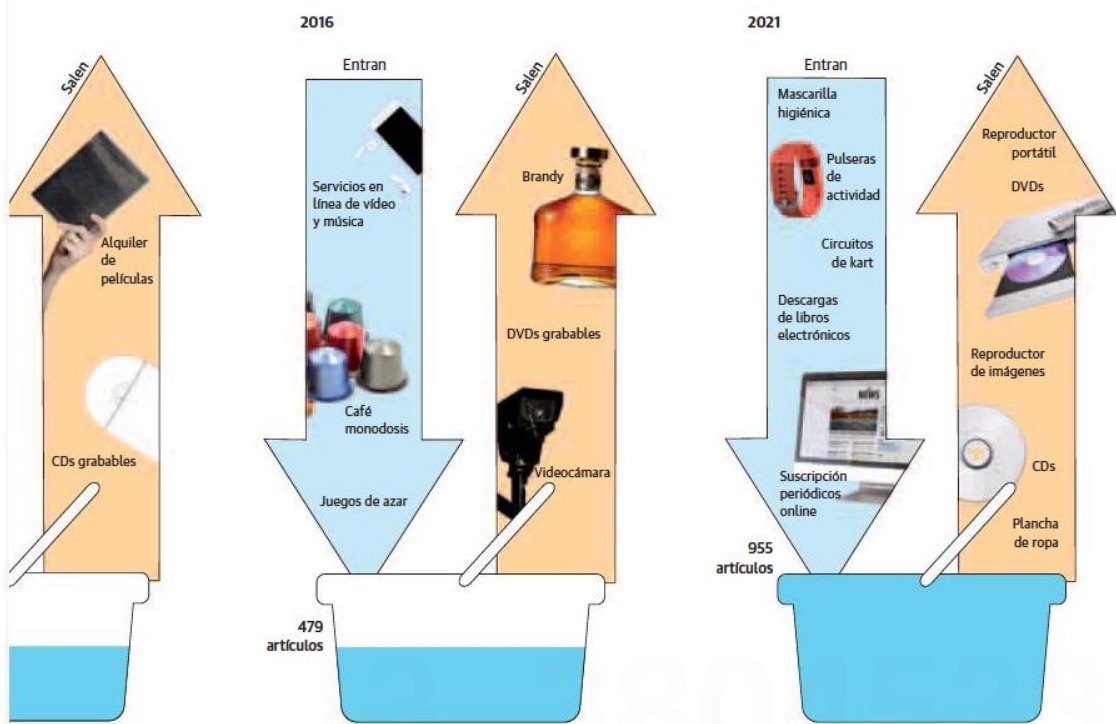


GRÁFICO LIDIA CARVAJAL

cosas, con la entrada de la mascarilla higiénica en la cesta de la compra. Los españoles, aun así, siempre han mantenido la categoría de «alimentos y bebidas no alcohólicas» entre lo que más dinero destinan. En el año 2002, el 21,8% del presupuesto de las familias se dedicaba a alimentación, en 2022 ha subido al 22,6%. Por el contrario, en los últimos 20 años en lo que menos han gastado los españoles es en bebidas alcohólicas y tabaco, pasando de un 3,21% a un 3,1% en el último año.

Pero en las revisiones, sin embargo, quedan fuera de la cesta de la compra, como ha pasado con la base 2021 que ha entrado en vigor este mes de enero, productos tan consumidos como el mercado liberalizado de la electricidad, al que están sujetos en torno a 17 millones de consumidores.

Entre enero de 2002 y enero de 2022, la inflación ha crecido el 49%, aunque la media se ha mantenido en torno al 3%

Es un asunto que, como ha explicado el INE, están estudiando con las eléctricas cómo incorporarlo ya que, asegura Cardoso, hay ocasiones en las que no se puede separar de la factura de la luz el precio de la cantidad consumida. García considera que «está bien» que no todos los aspectos energéticos estén incorporados en la inflación, aunque si debería estar en la subyacente. «Tienen componentes que son atípicos, por lo que podrían incorporar en el dato de inflación aspectos que no reflejaran exactamente la inflación real».

Calidad de la muestra

El sistema que utiliza el INE para analizar mes a mes el gasto de los españoles es similar al que se utiliza en países de nuestro entorno, al igual que algunos de los puntos flacos. Para Cardoso, es «muy difícil» introducir temas de calidad de los productos dentro del análisis de los precios, sobre todo en elementos tecnológicos. «Aunque el precio no lo refleje, si hay una mejora en los bienes tecnológicos que consumimos, se puede sobreestimar la inflación, ya que a mismo precio hay un pro-

ducto mejor». Si fuera el mismo bien, el precio, avisa Cardoso, «hubiera caído».

Si bien es cierto que en los últimos 20 años la inflación media se ha mantenido en prácticamente los mismos términos -en 2002 se situó en un 3,06% y la de 2021 en un 3,09%-, lo que ha variado en términos absolutos es la inflación total. Entre enero de 2002 y enero de 2022 se ha incrementado en un 49%, entre otras cosas, por los productos incluidos en la cesta de la compra. No obstante, a juicio de García, los sueldos no se han ajustado «en esa medida» a los niveles de inflación.

Esta opinión choca con la de Cardoso, para quien existe una «heterogeneidad bastante importante» dentro de la sociedad en lo que a sueldos se refiere. Mientras las pensiones se han actualizado conforme al IPC, y el salario mínimo interprofesional ha crecido, hay otros sueldos que se han mantenido. Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la subida de la inflación se debe a las energías y a los combustibles, algo que no consumen de igual forma todas las familias.

La luz y los combustibles, los bienes protagonistas del IPC

F. MORALES

MADRID. La cesta de la compra está «imposible». Podría ser el titular dado esta semana tras conocer la inflación de enero de 2022 (6,1%), pero lo cierto es que esa frase se publicó en este periódico en febrero de 2017 tras conocer el dato del IPC. Se había disparado hasta el 3%, su nivel más alto desde 2012. En aquel momento, al igual que ahora, se debía al precio de los carburantes y la luz, la cual se ha encarecido en el último año el 46,4%, incluyendo las rebajas impositivas aplicadas a la factura de la electricidad. De esta forma, son dos elementos que se convierten en denominador común de toda la evolución de los precios de los últimos 20 años.

Fue en 2011, mientras España estaba sumergida en una crisis económica, cuando se regis-

tró en un mes de abril un nivel de inflación del 3,8%, también en plena escalada del petróleo. En ese momento, el precio de la luz protagonizó un fuerte crecimiento, del 9,8%, que se acabó estabilizando en 2012.

Pero en enero de 2007, la inflación se situó en el 2,4%, el nivel más reducido desde marzo de 2004, muy por debajo del 4% registrado en julio de 2006. Ello se debió a la moderación del crudo en los mercados internacionales. No obstante, en aquel momento la luz volvió a subir el 2,8%, al igual que se incrementó el precio del gas y el agua, entre otros bienes.

Lo que sí disminuyó su precio en 2007 fue el aceite. En concreto, retrocedió el 8,2%, aunque en 2022, según los últimos datos, se ha incrementado el 30,1%, al igual que el butano y propano, que se ha encarecido el 33,5%.

Domingo 20.02.22
EL NORTE DE CASTILLA

| 39

Los clientes de Gadis donan 20.243 euros a la Asociación Contra el Cáncer

VALLADOLID. Siete días de campaña y 20.243 euros de recaudación en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer es la aportación económica que los clientes de Supermercados Gadis han realizado a la 'La compra de tu vida', acción

que se ha llevado a cabo entre el 4 y 11 de febrero en todos los establecimientos de la compañía tanto en Galicia como en Castilla y León.

La donación que los clientes de Gadis realizaron a la AECC se destinará a impulsar la investigación contra

el cáncer y financiar los servicios de apoyo y acompañamiento a los pacientes y a sus familias. «Nuestros clientes son un ejemplo de solidaridad. Comparten con nosotros nuestro propósito: impactar positivamente en la vida de las personas», sostiene Melisa Pagliaro Fernández, directora de Marketing de GADISA retail.

Gadis también quiere enaltecer la labor que realiza la AECC tanto con los pacientes como en lo relativo al apoyo al entorno familiar.

Acuerdo de la Fundación Michelin con el Centro San Juan de Dios de Valladolid

Michelin vuelve a materializar su compromiso social apoyando a las personas más desfavorecidas y que más necesitan del apoyo de la sociedad. Es por eso que este jueves se ha firmado un convenio de colaboración entre la Fundación Michelin España Portugal y el Centro San Juan de Dios de Valladolid, facilitando la labor del centro con un acuerdo que se enmarca bajo los conceptos de movilidad y solidaridad.

El Centro San Juan de Dios de Valladolid, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de España, es una entidad sin áni-



Jose Vicente Farpón (San Juan de Dios) y Jose Bruno Arias (Michelin Valladolid).

mo de lucro que ofrece sus servicios a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias. Con una plantilla de 135 profesionales y 40 voluntarios, atiende a un total de 350 usuarios repartidos entre todas sus instalaciones. La Fundación Michelin

España Portugal facilitará los neumáticos necesarios para que todos los vehículos de la entidad, que son utilizados en el ámbito de su actividad, puedan llevar a cabo sus fines sociales de forma óptima y segura. Durante el acto, la Fundación Michelin también ha en-

tregado 17 tablets para que el Centro pueda mejorar su labor de acercar la sociedad a sus usuarios.

Tras la firma del convenio, Jose Vicente Farpón Marcos, director gerente del Centro San Juan de Dios de Valladolid, ha valorado enormemente el convenio con Michelin, una empresa señera que se caracteriza por su compromiso social con los colectivos que pueden tener mayores dificultades».

Jose Bruno Arias Pérez, director de la Fábrica de Michelin en Valladolid, y en representación de Fundación Michelin, destacó: «El compromiso con las personas es uno de los ejes fundamentales de Michelin con la sociedad, en especial con las personas con discapacidad».

lunes, 21 de febrero de 2022



sábado, 19 de febrero de 2022

El Ayuntamiento dobla la superficie de la zona prohibida para coches contaminantes

Los vehículos sin etiqueta ambiental tendrán vedado su acceso al centro en el segundo semestre de 2023

J. ASUA



VALLADOLID. La futura zona de bajas emisiones, que prohibirá la circulación de los coches más contaminantes a partir del segundo semestre del año que viene, doblará la superficie prevista hace ocho meses. El Ayuntamiento de Valladolid presentó ayer el proyecto de este área, que se ampliará más del 100% con respecto a la anunciada en junio de 2021. Si en un principio estaba planteado vedar el paso a estos vehículos en 1,4 kilómetros cuadrados, finalmente será en 3,1. Quedarán delimitados por las calles Puente Mayor-Juana de Castilla, Arzobispo José Delgado, Paseo del Hospital Militar, Paseo de Arco de Ladrillo, Santa Fe, Farnesio, túnel de Labradores, calle de la Via, Unión, Nicasio Pérez, plaza de San Juan, Huelgas, Real de Burgos, Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, plaza de San Nicolás y Puente Mayor.

La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, explicó que los estudios técnicos aconsejan esta extensión porque se conseguirán mejores resultados en la reducción de la contaminación en la ciudad. Según las estimaciones municipales, con esta nueva delimitación en 2030 se lograría rebajar las emisiones, solo en la zona centro, en un 44% para el dióxido de carbono, el 64,3% en óxido de nitrógeno y en un 78% en partículas en suspensión. Esta mejora en los valores, para acercarlos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también se notará en el resto de la capital, con reducciones de hasta casi el 6% en algunos contaminantes provocados por el tráfico a motor. Calles importantes para la circulación que no entrarán en la primera zona de bajas emisiones, como Miguel Íscar, Isabel la Católica, San Quirce, Gamazo o la zona de estación de Campo Grande, se suman, con este nuevo diseño, a la trama de viales en la que se aplicarán las restricciones.

El Plan de Calidad del Aire, que será aprobado en el pleno del próximo 2 de marzo, establece que



Un taxi y varios coches circulan por la céntrica calle Miguel Íscar, ahora dentro de la zona de bajas emisiones. RODRIGO JIMÉNEZ

los vehículos sin distintivo ambiental no podrán entrar en este área a partir del segundo semestre del año que viene. En enero de 2025, solo podrán acceder los coches con etiqueta '0 emisiones', Eco y C, mientras que en 2030 únicamente podrán circular por el interior de la zona los '0 emisiones' y los Eco. En junio de 2023, el 28% del actual parque móvil, que no cuenta con etiqueta de la DGT, tendrá prohibido superar este perímetro para acceder al centro. Son cerca de 40.000 coches. El 1 de enero de 2025 la prohibición afectará a

A partir de junio del año que viene, el 28% del parque automovilístico de la capital no podrá acceder al centro

La zona de bajas emisiones abarca una superficie en el centro de la ciudad de 3,1 kilómetros cuadrados

La implantación supone una inversión de 1,5 millones

La implantación de la zona de bajas emisiones tiene un coste de 1,5 millones de euros, una cantidad para la que el Ayuntamiento ha solicitado una subvención de los fondos de recuperación de la Unión Europea, plan que respalda este

tipo de políticas de movilidad sostenible. María Sánchez apuntó que las posibilidades de lograr este apoyo económico son altas y avanzó que el Consistorio pondrá en marcha en los próximos meses una campaña informativa para que los vecinos conozcan cómo se van a aplicar las restricciones, así como los beneficios que estas medidas tendrán en la salud de los ciudadanos. «La

otro 35% de los automóviles con distintivo B (45.185 coches), mientras que en enero de 2030 se sumará el 28% de los que ahora están clasificados con la etiqueta C (51.211).

Exenciones

Sánchez acotó que estos porcentajes cambiarán en los próximos años, con la más que probable renovación del parque móvil hacia vehículos menos contaminantes. Si usted quiere saber qué etiqueta le corresponde al suyo solo tiene que entrar en la web de la DGT (dgt.es) e introducir la matrícula

la. De inmediato, le dirá la calificación de su turismo. El alcalde, Óscar Puente, defendió la ampliación de la zona no solo por los efectos beneficiosos que tendrá para la calidad del aire en Valladolid, sino porque será una medida más para contribuir a reducir el tráfico «de paso» por el centro de la capital.

Habrán exenciones. Además del transporte público, emergencias o funerarias, podrán acceder los vehículos de los residentes o los que tengan plazas de garaje en el interior del área. También se permitirá entrar para llevar el coche a un taller situado dentro de la misma, a los clientes de los hoteles o a los que se dirijan a aparcamientos autorizados.

Sánchez subrayó que el periodo de exposición pública de este proyecto se ha extendido durante dos meses ante su importancia. Durante este plazo se han recogido alegaciones presentadas por la Junta, Partido Popular, Ciudadanos, Ecologistas en Acción, Asamblea Ciclista, Federación de Vecinos Antonio Machado, Asociación La Curva y Comisiones Obreras. En total, se han incorporado al plan 29 propuestas.

contaminación atmosférica es uno de los principales problemas medioambientales asociados a las ciudades, al que debemos hacer frente decididamente, tal como llevamos haciendo desde 2015», defendió el alcalde, quien recordó que su puesta en marcha es obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes, como se recoge en la Ley de Cambio Climático.

LAS ETIQUETAS AMBIENTALES DE LA DGT EN VALLADOLID CAPITAL

Parque automovilístico: La DGT tiene registrados en la ciudad un total de 136.924 vehículos, de los que solo el 0,6% se mueven con tecnologías limpias.

Sin etiqueta

39.613

vehículos no cuentan con etiqueta en la ciudad (27.500 en uso) al ser muy antiguos y altamente contaminantes

Etiqueta B



45.185

coches y furgonetas de gasolina matriculados después de enero de 2000 y todos los diésel a partir de enero de 2006.

Etiqueta C



51.211

de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel inscritos a partir de enero de 2014.

Etiquetas Eco y Cero



915

eléctricos, híbridos y propulsados por gas o por gas licuado del petróleo

LOS PLAZOS

► **Segundo semestre de 2023.** No podrán acceder a la zona de bajas emisiones los vehículos más antiguos y contaminantes sin distintivo ambiental de la DGT.

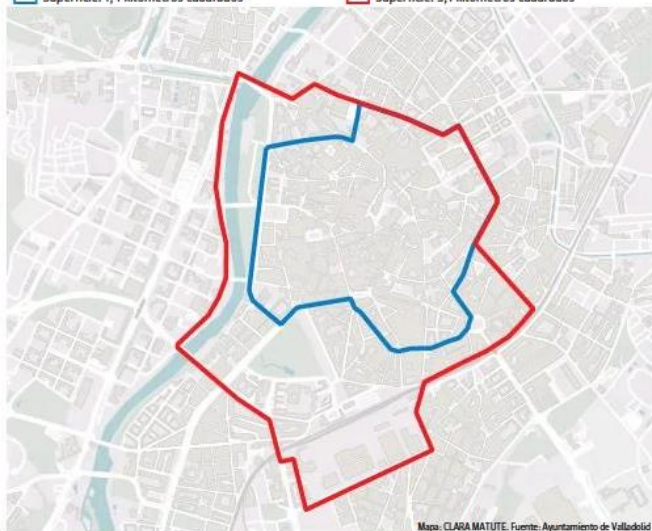
► **1 de enero de 2025.** Quedan fuera los de etiqueta B. Solo accederán los distintivos C, Eco y '0 emisiones'.

► **1 de enero de 2030.** Solo podrán entrar en la zona restringida los coches con etiquetas Eco o '0 emisiones'.

La Zona de Bajas Emisiones en el centro de Valladolid

□ **Primera propuesta ZBE.** Junio de 2021
Superficie: 1,4 kilómetros cuadrados

□ **Propuesta definitiva ZBE.** Febrero de 2022
Superficie: 3,1 kilómetros cuadrados



Mapa: CLARA MATUTE. Fuente: Ayuntamiento de Valladolid

Un despliegue de 41 cámaras controlará el área y tramitará las multas de los infractores

Los objetivos leerán las matrículas y enviarán la información para imponer las multas, cuya cuantía aún está por determinar

J. A.

VALLADOLID. La ampliación de la zona de bajas emisiones, contemplada en la Ley de Cambio Climático, conllevará también un incremento en el número de cámaras que controlarán las posibles infracciones. Si en un principio estaba previsto instalar quince objetivos, ahora serán 41 repartidos tanto en los accesos del perímetro del área como en el interior de la misma.

Se trata de lectores de matrícula que permiten conocer de forma inmediata el distintivo ambiental que corresponde a cada vehículo.

A partir de ahí, se tramitará la multa correspondiente. La edil María Sánchez avanzó que su departamento trabaja ya en la ordenanza que regulará esta superficie restringida y que incluirá la cuantía de las multas, pendientes de fijar.

Calendario escalonado

«Hemos planteado un calendario escalonado, con plazos amplios, para que la ciudadanía vallisoletana pueda ir adaptándose. Entendemos que es importante combinar la ambición en materia de salud pública, con un plan que reduzca muy significativamente la contaminación y que a su vez no sea brusco y tenga en cuenta a la ciudadanía», recaló la concejala de Medio Ambiente. Óscar Puente abundó en los beneficios de esta implantación obligada por ley con la que se busca «cuidar y proteger la salud» de los vecinos de la capital.

Sábado 19.02.22
EL NORTE DE CASTILLA

| ECONOMÍA | 31

Las empresas tendrán un mes para transitar de los ERTE covid a los de la reforma laboral

LUCÍA PALACIOS

MADRID. Las empresas tendrán un mes de plazo para que puedan transitar desde los actuales ERTE derivados de la pandemia a los nuevos que establece la reforma laboral. Así lo anunció ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien avanzó además que esta medida –que está siendo aún negociada con los agentes sociales– podría ver la luz en el Consejo de Ministros del próximo martes. «Vamos a una situación de un mes de transición para que las empresas puedan cambiar el modelo y aplicar directamente la reforma laboral», indicó Díaz en declaraciones a la prensa a su llegada a la clausura del Consejo de Fomento de la Economía Social.

Y es que los actuales ERTE covid expiran el próximo 28 de febrero y aún hay más de 104.000 trabajadores afectados. El Gobierno ha rechazado una nueva prórroga, como piden los sindicatos y algunos sectores, pero el pasado jueves puso encima de la mesa del diálogo social una propuesta que pasa por activar los mecanismos que se establecieron en la nueva ley y, más concretamente, desplegar por primera vez el nuevo mecanismo RED para activar un ERTE sectorial para las agencias de viajes, una oferta que, no convenció totalmente a los sindicatos.

No obstante, la vicepresidenta lanzó un mensaje de tranquilidad tanto a los trabajadores como a las empresas y dijo que pueden estar «absolutamente tranquilos» ante la finalización de los ERTE covid.

ECONOMÍA

El FMI allana la subida del diésel

● El Fondo afirma que hay «margen» para una fiscalidad «más ambiciosa» en los carburantes y propone un «aumento de impuestos» ● En esa misma línea trabajan los expertos fiscales de Montero, que entregarán su informe en unos días

DANIEL VIANA MADRID
El Fondo Monetario Internacional (FMI) avala la subida de impuestos a los combustibles que ambiciona María Jesús Montero. En el informe sobre la economía española que ha publicado esta semana, el organismo señala que España presenta «margen» para una fiscalidad de los carburantes «más ambiciosa», y propone claramente un «aumento de impuestos». Al diésel y también a la gasolina.

De esta manera, el FMI apoya una de las principales líneas de trabajo del grupo de expertos para la reforma fiscal, que tienen que entregar a final de mes el documento con sus conclusiones, y va incluso más allá de lo que la ministra de Hacienda quiso plasmar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. La oposición del PNV obligó a Montero a eliminar en el último momento la subida del diésel, medida que llegó incluso a cuantificar y prometer ante Bruselas. Pero ya entonces desde el Ministerio se apuntó que la actuación sólo se aplazaba, y 2023, año en el que la reforma fiscal estará en vigor «a más tardar», es el momento elegido por Hacienda para retomarla.

Sin embargo, desde algunos ámbitos del propio Gobierno y, en concreto, desde el Ministerio de Agricultura, se está intentando frenar la medida antes incluso de que se anuncie. La razón: que el precio de los combustibles está en máximos y un incremento de los impuestos no haría más que elevar las cargas que ya sufren transportistas, taxistas y, por supuesto, agricultores. Todos ellos representan caladeros de votos muy importantes en los que otros partidos están muy dispuestos a pescar. Un ejemplo evidente: el de Vox y los agricultores y ganaderos.

Pero un aumento de los precios de la gasolina y el diésel también afectaría, de manera igualmente directa, a las clases medias y trabajadoras, las mismas a las que Montero siempre dijo que no elevaría impuestos. De hecho, el FMI reconoce que el impacto del incremento sería «heterogéneo» y que, además, tendría consecuencias importantes para los «hogares rurales» dado que su gasto en combustible es mayor al tener que recorrer «distancias más largas» y contar con «medios de transporte público limitados».

El documento del organismo que dirige Kristalina Gueorguieva también reflexiona sobre el hecho de que en España, al igual que el resto de países europeos, «los impuestos al diésel son sustancialmente más bajos». «Estos menores costes aumentan la demanda de coches diésel, que representan alrededor del 60% del parque automovilístico en Espa-



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. EFE

ña», explica el Fondo, cuando precisamente «el diésel tiene un mayor contenido de carbono» y ofrecen un «peor comportamiento que los vehículos de gasolina en términos de contaminación».

Esto es, que no tiene sentido que el diésel tenga un beneficio fiscal so-

bre la gasolina cuando lo que se busca justamente es reducir las emisiones. Y es que estas modificaciones impositivas, las que promueve el FMI y estudian los expertos de Montero, se enmarcan en lo que se denomina como fiscalidad verde y que busca elevar los ingresos tributarios

penalizando los comportamientos y actividades más contaminantes.

Junto a estas actuaciones, el grupo para la reforma fiscal también ha trabajado en la armonización fiscal que la ministra de Hacienda lleva persiguiendo desde que llegó al Ministerio. La propuesta concre-

ta se conocerá en breve, pero lo que parece seguro es que se pondrán unos mínimos para todo el país que eviten bonificaciones totales de impuestos, tal y como hace la Comunidad de Madrid, Andalucía o la Región de Murcia en algunos de los impuestos cedidos.

Nueva semana de récord en las gasolineras

El precio medio del litro de la gasolina y el gasóleo continúa disparado y batiendo marcas históricas

GUILLERMO DEL PALACIO MADRID
El precio de la gasolina continúa disparado y esta semana se han marcado nuevos récords en este carburante y en el gasóleo. El fin de semana llega con un ligerísimo respiro en el barril de Brent, que el lunes alcanzó los 95,72 euros y no ha bajado de los 90 en estos días.

Según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, correspondientes al 14 de febrero, el precio medio del litro de gasolina estos días es de 1,575 euros, lo que supone un incremento del 1,09% respecto a los 1,558 euros que costaba cada litro la semana anterior. Esta cifra, a su vez

también suponía un ascenso y es que la gasolina acumula una subida del 6,5% desde que comenzó el año y el precio lleva ya tres semanas seguidas batiendo su máximo histórico.

Por su parte, el litro de gasóleo se sitúa en 1,462 euros, lo que también supone un récord y un incremento (del 1,24%) respecto a la semana pasada, cuando llegó a los 1,444 euros de media (que entonces igualaban el máximo precio registrado). La subida acumulada del diésel en 2022 se sitúa ya en el 8,5%.

Este incremento del precio repercute directamente en los bolsillos. Hace dos semanas, llenar un

depósito de 55 litros de gasolina costaba en torno a 84,59 euros, mientras que con los precios de ésta cuesta 86,62 euros. La subida ya roza los 20 euros respecto al año anterior.

En el caso del gasóleo también hay más de 18 euros de diferencia si se compara el depósito de 55 litros con el mismo mes de 2021 y llega a los 80,41 (nunca antes había superado el listón de los 80 euros).

Mientras, el precio del petróleo continúa disparado. El barril de Brent comenzó la semana en 95,72 euros (el más alto en los últimos años) y, si bien se suavizó después, no ha bajado de unos 90

euros que hace unos meses parecían inalcanzables. El petróleo intermedio de Texas se sitúa en niveles similares (el jueves cerró a 91,76 dólares el barril). A finales de 2021 JP Morgan ya pronosticó que el precio llegaría a los 125 dólares en 2022 y podría incluso alcanzar los 150 en 2023.

En esta escalada entran en juego diversos factores, que van desde el aumento de la demanda a la tensión entre Ucrania y Rusia (y la posibilidad de que ésta cierre el grifo del petróleo) o el incremento del precio de la arena, que, aunque pueda no parecerlo es un bien muy demandado y escaso y necesario para el fracking.